

Memorias de racismo, explotación y resistencia. El corte de caña en el valle Autlán-El Grullo, México, 1968-2013

Gerardo Rodríguez Solís*

Universidad de California-Santa Bárbara
gerardo.sociologia@gmail.com

Recibido: 20.01.19

Aceptado: 5.05.19

Resumen: La década de 1960 marcó el comienzo del proyecto agroindustrial cañero en el valle Autlán-El Grullo, Jalisco, México. En 1968, se plantaron las primeras cañas, se comenzó a construir el ingenio azucarero y se reclutaron trabajadores agrícolas fuera de la región. Durante las siguientes décadas, la caña se convirtió en el principal cultivo y mercancía clave en la economía del valle. Actualmente, la elite local recuerda este vuelco a la agroindustria como un gran logro de políticos y organizaciones cañeras. En esta historia oficial de progreso regional, los cortadores de caña y sus familias sólo figuran en registros de empleos temporales, estadísticas gubernamentales de beneficiarios y en anécdotas para hablar de indígenas, migrantes, pobres y violentos.

El objetivo del artículo es evidenciar y cuestionar tal narrativa dominante mediante los relatos históricos de trabajadores y trabajadoras cañeras. Sus recuerdos son de explotación laboral, racismo y segregación espacial; pero también de resistencias cotidianas para hacer frente a tales violencias estructurales y simbólicas. El argumento principal es que el proyecto cañero-

* Licenciado en sociología por la Universidad de Guadalajara, maestro en antropología social por El Colegio de Michoacán y actualmente es estudiante del doctorado en antropología en la Universidad de California-Santa Barbara.

azucarero es un proceso de dominación y conflicto de clase articulado con la racialización de los cortadores y la desvaloración del trabajo de mujeres.

El documento es resultado de una etnografía histórica regional con enfoque de economía política antropológica. El estudio se realizó entre 2010 y 2013 con historias orales; entrevistas; análisis de prensa y documentos oficiales; y observación participante en parcelas, albergues, galeras, oficinas de gobierno, empresas y organizaciones cañeras.

Palabras Clave: Trabajo agrícola; Racialización; Resistencias cotidianas.

Resumo: Os anos 1960 marcaram o início do projeto agroindustrial da cana no vale de Autlán-El Grullo, Jalisco, México. Em 1968, a primeira cana-de-açúcar foi plantada, a usina de açúcar começou a ser construída e os trabalhadores agrícolas foram recrutados fora da região. Durante as décadas seguintes, a cana se tornou a principal cultura e commodity importante na economia do vale. Atualmente, a elite local lembra de tal mudança para a agroindústria como uma grande conquista de políticos e organizações de cana-de-açúcar. Nesta história oficial do progresso regional, os cortadores de cana e suas famílias aparecem apenas em registros de trabalho temporário, estatísticas governamentais de beneficiários e em anedotas para falar sobre indígenas, migrantes, pobres e pessoas violentas.

2 

O objetivo do artigo é evidenciar e questionar essa narrativa dominante através dos relatos históricos dos trabalhadores da cana. Suas memórias são de exploração laboral, racismo e segregação espacial; mas também de resistências cotidianas para enfrentar tal violência estrutural e simbólica. O principal argumento é que o projeto cana-açúcar é um processo de dominação e conflito de classes articulado com a racialização dos cortadores e a desvalorização do trabalho das mulheres.

O documento é o resultado de uma etnografia histórica regional com uma abordagem de economia política antropológica. O estudo foi realizado entre 2010 e 2013 com histórias orais; entrevistas; análise de jornais e documentos oficiais; e observação participante em terras agrícolas, abrigos, armazéns, escritórios governamentais, empresas e organizações de cana-de-açúcar.

Palabras Clave: Trabalho agrícola; Racialização; Resistências cotidianas.

Abstract: The 1960s marked the beginning of the sugarcane agroindustrial project in the Autlán-El Grullo valley, Jalisco, Mexico. In 1968, the first sugar cane was planted, the sugar mill began to be built, and agricultural workers were recruited outside the region. During the following decades, cane became the

main crop and key commodity in the economy of the valley. Currently, the local elite remembers this shift to agro-industry as a great achievement of politicians and sugarcane organizations. In this official story of regional progress, cane cutters and their families only appear in temporary employment records, government statistics of beneficiaries and in anecdotes to speak of indigenous, migrant, poor and violent.

The objective of the article is to evidence and question such dominant narrative through the historical accounts of cane workers. His memories are of labor exploitation, racism and spatial segregation; but also of daily resistances to face such structural and symbolic violence. The main argument is that the cane-sugar project is a process of domination and class conflict articulated with the racialization of the cutters and the devaluation of women's work.

The document is the result of a regional historical ethnography with an anthropological political economy approach. The study was conducted between 2010 and 2013 with oral histories; interviews; analysis of press and official documents; and participant observation in plots, shelters, galleys, government offices, companies and sugarcane organizations.

Keywords: Agricultural work; Racialization; Daily resistances.

Introducción

En 1984, el ayuntamiento de Autlán y el gobierno del estado de Jalisco construyeron la “*Plaza cívica general Marcelino García Barragán*”. En el lugar se encuentra una estatua de quien fue gobernador del estado de Jalisco (1943-1947) y secretario de la defensa nacional (1964-1970). Cada aniversario de su nacimiento, la élite regional le rinde un homenaje público con banda de guerra, coronas de flores y discursos que enfatizan su “*contribución al progreso y prestigio de esta ciudad*”, tal como se lee en la placa debajo de la figura de metal.

En conversaciones con parte de este grupo de políticos, profesionales y empresarios, se comenta cómo Barragán fue el gestor federal para construir el ingenio azucarero en 1968 y el impulsor regional para plantar las primeras cañas en el valle Autlán-El Grullo. También en la década de 1960, comenzaron dos proyectos más de agricultura intensiva con la siembra de tomate y melón para mercados nacionales y extranjeros. Actualmente, esta élite recuerda el inicio de la agroindustria regional como un gran logro económico y político enmarcado en narrativas de desarrollo y modernidad.

En 2010, a veinte kilómetros de la plaza cívica Barragán, la Confederación Nacional Campesina (CNC) construyó en las afueras de sus oficinas una estatua

de un hombre que sostiene un machete y un par de cañas. Su tamaño es significativamente menor a la de Barragán, está hecha de cantera y en su placa se lee “*Monumento al cortador de caña*”, sin nombre alguno ni actos conmemorativos anuales que hablen de su contribución a la ciudad.

Gustavo Martínez, de 65 años y jefe de cuadrilla de cortadores, fue el modelo para esa figura anónima. Lo confiesa en una de las pláticas en su cuarto del albergue para trabajadores de la CNC. En este artículo, él y otros cortadores narran los cincuenta años del proyecto agroindustrial con recuerdos de injusticias, abusos y exigencias. “*Nos explotan y nos pagan poco*”, Gustavo sentencia al hablar de sus 34 años en Autlán como trabajador cañero. Sin embargo, en la historia oficial regional no hay cabida para su nombre y trayectoria, sólo es número, categoría, estereotipo o estatua anónima.

En el presente artículo, explico este conflicto material y discursivo en el marco de la organización política y económica regional; es decir la estructuración de dominación y resistencia (Roseberry, 2007). El objetivo principal es comprender las narraciones históricas de Gustavo y otros cortadores de caña y sus familias en términos de resistencias cotidianas (Scott, 2000) y del continuo de violencia estructural y simbólica (Scheper-Hughes y Bourgois, 2004). A la par, exploro los discursos oficiales del personal gubernamental y élites locales para comprender los procesos de dominación y subalternidad (Guha, 2002).

Además, argumento la existencia de un proceso de racialización debido a la edificación de estereotipos raciales mediante discursos y representaciones del indio salvaje, ignorante y exótico acompañadas por prácticas políticas y económicas como la explotación laboral (Gotkowitz, 2011). O como lo dijo una empleada municipal:

“Ab sí, los cochos, sí, todos ellos son de Guerrero y de otros estados, pero todos son indios, aunque unos más que otros porque unos de plano ni hablan español y están acostumbrados a vivir donde sea. Eso sí, muy aguantadores para el trabajo”.

Tal racialización se articula tanto con categorizaciones estatales y empresariales de mano de obra migrante y temporal, como con la invisibilización del trabajo de mujeres en campos, casas, galeras y albergues. Es decir, detallo la presencia e intersección de violencias de clase, raza y sexo como formas de opresión (Crenshaw, 1991) útiles al funcionamiento y expansión del proyecto agroindustrial regional.

El documento es resultado de un estudio regional centrado en explicar las relaciones de poder y la producción de ideologías de un espacio político-

económico (Lomnitz, 1995). Es una etnografía histórica (Zendejas, 2008) construida mediante cuatro métodos:

- Observación participante en distintos periodos entre 2010 y 2013 en campos agrícolas; colonias y localidades referidas como “*lugar de jornaleros*”; albergues y galeras; y oficinas privadas y gubernamentales, incluyendo la asistencia a las sesiones de la mesa municipal de atención a jornaleros agrícolas de Atlán.
- Historias orales de cortadores de cañera y sus familias, producto de dos a cuatro visitas a sus hogares. Fueron diálogos individuales o grupales semiestructurados dirigidos a su trayectoria laboral.
- Entrevistas semiestructuradas con ejidatarios y pequeños propietarios; cronistas y docentes locales; personal de gobierno federal, estatal y de los municipios de Atlán y El Grullo; y representantes de organizaciones cañeras y de la empresa dueña del ingenio.
- Revisión de periódicos regionales publicados entre 1965 y 2012; ediciones anuales del Manual Azucarero Mexicano de 1968 a 2010; y documentos gubernamentales tales como leyes, informes y reglamentos de programas.

Las historias orales son la base de la argumentación etnográfica. Durante la investigación, un criterio clave fue conversar tanto con quienes laboraron durante las primeras décadas del proyecto cañero-azucarero como con la “*nueva generación*”, expresión usada por un cabo refiriéndose a quienes comenzaron a laborar en la década de 1990. Tal criterio generacional fue utilizado con el propósito principal de conocer diversas narrativas en torno a su situación de vivienda, lugar de nacimiento, conformación de grupo doméstico y puesto laboral.

El artículo lo divido en cinco apartados. Primero, describo brevemente el valle Atlán-El Grullo como zona agroindustrial. Después, me centro en los primeros estigmas para el corte de caña y de quienes lo realizan; en el marco del comienzo del proyecto cañero-azucarero. Tercero, abordo las dinámicas de enganche y la creación de supuestos y generalizaciones hacia los lugares de “*origen*” de los cortadores. En la cuarta sección, describo la supuesta representatividad laboral y la cadena de patronazgos en contraposición a las participaciones y exigencias de los cortadores. Posteriormente, expongo las actuales categorizaciones gubernamentales articuladas con la exotización de “*lo indígena*” y la desvalorización del trabajo de las mujeres en el corte de caña. En las últimas páginas, reflexiono acerca de la importancia de la memoria histórica de los y las trabajadoras agrícolas para explicar la explotación, el racismo y la resistencia.

Las siguientes historias no representan la totalidad de la situación de quienes laboran en el corte de caña en el valle. Sin embargo, sus relatos evidencian la articulación histórica de racismo y explotación laboral en la agroindustria, y guían la discusión de la infrapolítica en el trabajo agrícola asalariado, en especial las resistencias cotidianas frente a la exclusión y precarización. Así, espero que durante todo el artículo no aparezca una narrativa de objetos de investigación, recursos, números, categorías ni tipos; sino de seres humanos, de sujetos reflexivos y partícipes de los procesos sociales.

La reorganización política-económica en el valle

El valle Autlán-El Grullo se ubica en el suroeste de Jalisco, México. La noción de valle se basa en la dinámica agrícola creada a raíz de las tierras irrigadas por la cuenca del río Ayuquila-Armería. La posibilidad de que miles de hectáreas accedan al riego se debe a proyectos de infraestructura hidráulica. La obra que transformó la dinámica agrícola fue la construcción de la presa Tacotán, cuyo inicio de operaciones fue en 1958 y formó parte del desarrollo regional en telefonía, electricidad, carreteras, drenaje e irrigación con la Comisión de Planeación de la Costa Sur creada en la década de 1950 (Van der Zaag, 1992). Además, durante las siguientes décadas creció el sistema de canales de riego y en 1993 se inauguró la presa Ramón Corona o Trigomil.

Los cambios regionales a mediados del siglo XX también incluyeron la expansión de servicios financieros, educativos y hospitalarios; y la explotación minera de 1953 a 1967 por parte de la Compañía Minera Autlán, de capital nacional y estadounidense (Medina, 2005). El papel regional de la empresa minera involucró su presión y participación monetaria en la construcción de la carretera hacia la costa para embarcar el mineral hacia Estados Unidos; así como la construcción de dos colonias para sus empleados que posteriormente pasaron a manos del ingenio azucarero.

Estas transformaciones crearon un escenario favorable para la agroindustria en tierras que unas décadas antes fueron redistribuidas en ejidos y pequeñas propiedades (Martínez, 1999). Las primeras experiencias de agricultura intensiva fueron con algodón y papaya, pero los tres principales monocultivos fueron de melón, jitomate y caña de azúcar; desplazando el cultivo combinado de calabaza, maíz y frijol para consumo local y regional (González, 2012). Asimismo, en los tres proyectos agroindustriales se presentaron enganches, inmigraciones y asentamientos para el trabajo agrícola asalariado, principalmente para las temporadas de cosecha (Torres, 1997).



El comienzo del ahora recordado “boom melonero” fue en 1968 y la bonanza tomatera fue en 1971; años en los que también se inició la construcción del ingenio Melchor Ocampo y las primeras siembras de caña para abastecerlo. Los cultivos del melón y tomate empezaron con proyectos agroexportadores de empresas estadounidenses; posteriormente la producción se articuló con la creación de compañías y agrupaciones regionales (González, 2012). Si bien actualmente la producción hortícola continúa, para finales de la década de 1980 este boom terminó por causa de plagas, daños a mantos acuíferos por su sobreexplotación, problemas financieros de productores locales e infertilidad de tierras por uso de agroquímicos y nula rotación de cultivos (González, 2012).

El fin de la bonanza hortícola posibilitó el aumento de parcelas para proveer al ingenio azucarero. Durante los años siguientes creció el número de hectáreas cañeras hasta convertirse actualmente en el principal cultivo regional en las tierras de riego. Así, el proyecto cañero-azucarero se insertó y formó parte de la reorganización del espacio y la economía política regional.

Esta agroindustria se basa en la producción de azúcar estándar en el ingenio Melchor Ocampo, ubicado en las fronteras municipales de Autlán con El Grullo. Su actual dueño es la empresa Zucarmex pero desde 1968 hasta 1993 fue de propiedad federal. El abasto de caña está a cargo de la Asociación de Agricultores del Valle Autlán-El Grullo y de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar. Las organizaciones son conocidas regionalmente como la Pequeña y la CNC respectivamente debido a sus afiliaciones nacionales, términos que usaré en el texto. Ambas agrupaciones cañeras cumplen varias funciones en la cadena de producción, entre ellas contratar la mano de obra necesaria para el abasto de caña: cabos, cortadores, quemadores y choferes.

La zafra o temporada de producción cañera-azucarera es regularmente de noviembre a mayo. Durante esos meses, el ingenio funciona las 24 horas del día y el suministro de caña no se detiene. O como lo explica Cesar Hernández, uno de los primeros plantadores y cortadores de caña en el valle:

“Cuando el ingenio comienza a trabajar no hay fiestas, no hay domingos, no hay nada. El molino empieza a trabajar todos los días y todas las noches, entonces nosotros tenemos que abastecer la molienda, eso es”.

Las primeras cuadrillas: trabajo sucio y de fuereños

César Hernández coloca agua y alimento para sus veinte gallos de pelea que se encuentran en el patio de su casa. “Es para pasar el tiempo ya que no es muy buen

negocio”, dice, al vender dos o tres gallos al mes, aunque menciona que cuenta con un ingreso fijo mensual desde hace cuatro años: la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por haber laborado más de cuarenta años como “*trabajador eventual de campo*”. También enfatiza que esos años de corte le dejaron quemaduras y daños en pulmones y rodillas. Actualmente, él habita en una localidad del municipio de Autlán, junto con su esposa y cuatro hijos: ella trabaja en casa y ellos en el corte de caña.

César tiene 74 años y nació en Puente Ixtla, Morelos. En su niñez, él y su familia migraron hacia Guerrero debido al constante robo de su ganado. Posteriormente, comenzó a moverse por su cuenta a zonas agrícolas de los estados de Morelos y Guerrero. Al casarse, se estableció unos años en Zamora, Michoacán, y laboró en una compañía de fresas. César recuerda que ahí lo dieron de alta en el IMSS y le aconsejaron que guardara muy bien esos papeles. Después, se fue junto con su familia a Tecomán, Colima, y ahí lo contrataron para trabajar en Casimiro Castillo, Jalisco, municipio donde comenzó a cortar caña a la edad de 22 años. Fueron siete las temporadas en que cortó en esa región y en los meses sin zafra buscó trabajo en lugares cercanos.

En 1968, un enganchador lo invitó a plantar los primeros semilleros en el valle Autlán-El Grullo para el ingenio Melchor Ocampo, el cual apenas iniciaba su edificación. En ese mismo año, un periódico local publicó un desplegado en el cual el gobierno municipal de Autlán agradecía públicamente al general García Barragán por apoyar la construcción del ingenio. También, ejidatarios cercanos a Barragán formaron el Comité de Productores Voluntarios de Caña de Azúcar para promover la plantación de caña, y ellos mismos crearían la organización cañera local afiliada a la CNC (Guzmán, 1995).

Tal comité de productores fue el encargado de contratar gente para los primeros semilleros y las posteriores cosechas. La decisión fue buscar gente experimentada en las regiones con ingenios más cercanas: en Ciudad Cuauhtémoc, Colima, y en Casimiro Castillo, Jalisco. César fue uno de quienes aceptó la invitación. Él recuerda que preguntó a los enganchadores “*¿qué pasa si me quiero quedar en Autlán?*” a lo que le respondieron “*está muy bien, eso queremos, que se quede gente que ya sepa trabajar con la caña*”.

Sin embargo, ellos no sólo buscaban experiencia, también querían gente que aceptara pago a destajo, cortar minutos después de quemada la caña, nulo horario fijo ni descanso semanal. Ya en el valle, César cargaba la caña en las carretas que se llevaban los tractores al ingenio y trabajaba hasta las diez u once



de la noche porque, después de cortar, los mandaban a quemar la caña para el siguiente día iniciar a las seis de la mañana.

Similares condiciones laborales ya se repetían en las demás regiones cañeras del país desde décadas antes. Luisa Paré e Irma Juárez (1987) estudiaron cómo la agroindustria cañera en México se reconfiguró a partir de la particular aplicación de la reforma agraria en las regiones cañeras y los posteriores decretos cañeros. La mano de obra de las haciendas azucareras se transformó en pequeños productores. Estos últimos también se convirtieron en empleadores mediante el intermediarismo de enganchadores, contratistas y cabos. El corte de caña lo comenzaron a realizar trabajadores locales sin tierras, hijos de cañeros con posibilidad de heredar las tierras y “*avecindados que viven en los poblados cercanos a los ingenios [...] [y] trabajadores migrantes o foráneos, como se les denomina comúnmente en las zonas cañeras*” (Paré y Juárez, 1987: 40). El valle Autlán-El Grullo, al volcarse a esta agroindustria, se insertó en el proceso nacional que replanteó las relaciones laborales en la producción cañera.

Cristóbal Contreras fue uno de los primeros partícipes como cabo y enganchador. Él inició su cuadrilla con gente radicada en la región; sin embargo, a los primeros días de corte comenzaron las quejas. Cristóbal narra que quienes no continuaron en el corte le decían “*¡ese trabajo es del diablo y muy sucio!*” debido a que, además de las condiciones ya descritas, a su regreso terminaban con el cuerpo y ropa negras por el tizne y las manos cortadas por el contacto constante con las hojas de caña.

Lo destacado, es que el corte de caña fue considerado desde un inicio como “*trabajo sucio*”, frase constantemente repetida hasta hoy. Por ejemplo, una empleada de la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) opina acerca de quienes habitan en uno de los albergues cañeros: “*se sienten rechazados [...] en los camiones a veces no los suben y es que huelen mal por el humo de su ropa*”.

Sumado a esto, el corte lo realizaban personas que anteriormente no se radicaban en el valle, tanto por su conocimiento y experiencia previa como por la poca demanda del empleo en la región ante la negativa a aceptar las condiciones laborales. Se les marcó como “*fuereños*” y ese estigma continúa aun cuando muchas de las personas se instalaron definitivamente desde hace décadas. Norbert Elias (2003) explica que el fuereño o forastero es una categoría que polariza y homogeneiza entre el “*nosotros*” superior y cohesionado por un pasado en común, frente al “*ellos*” desarraigado e inferior. En esta región, ese “*nosotros*” se cohesionó principalmente con dos grupos: familias cuyo abolengo

lo rastrean hasta siglos anteriores; y quienes residen desde las décadas de 1930 y 1940 en el marco del reparto agrario.

La estigmatización de “*fuereño*” ha traído problemas concretos. Para Cesar fueron varias dificultades para construir su casa. A su arribo, él vivió en bodegas y casonas porque los contratistas y cabos adaptaron lugares ante la situación. No obstante, debido a las condiciones de hacinamiento, lejanía de tiendas y falta de acceso a servicios, varios buscaron viviendas propias. Cesar fue uno de ellos, primero rentó unos años y después compró un terreno en el mismo pueblo.

Los problemas surgieron con la construcción de su casa ya que lo obligaron a edificar en las afueras del poblado donde no había tomas directas de agua potable ni de energía eléctrica. Por esa causa, gastó más dinero en la compra de tubería y gestionó, directamente con el ayuntamiento de Autlán, la instalación de tomas eléctricas. Ya finalizada su casa, le obstaculizaron la solicitud de la remoción de escombros y tierra que dificultaban a él y a su familia acceder a su vivienda. Tales acciones fueron realizadas por otros residentes del poblado con ayuda del entonces delegado municipal. Cesar, al recrear esos hechos, sostiene que el argumento constante de ellos era “*porque no era de aquí [...] me veían como fuereño*”.

Cesar fue de los primeros cortadores en comprar un terreno en el poblado para construir una casa propia a principios de la década de 1980. Sin embargo, en el mismo poblado, actualmente hay presión de grupos de habitantes para que no se les dé acceso a tomas de agua potable a las casas donde se radican otros residentes, cortadores de caña en su mayoría. Uno de sus argumentos es que no son del pueblo aun cuando algunos residen ahí desde hace más de 30 años.

Hasta aquí, la importancia está en identificar la construcción de esos primeros estigmas regionales hacia los cortadores de caña y sus familias. El estigma no sólo se compone de prejuicios y rechazos individuales en las relaciones cotidianas, sino de un proceso de estigmatización social por tratarse de grupos que consideran a otros como un colectivo diferente e inferior ante las tensiones y desequilibrios del poder (Elias, 2003). Con ello, se construyeron estigmas a la par que se acentuaron contrastes y comparaciones. Sucio y fuereño se convirtieron en cualidades inherentes a ser cortador de caña en la región.

Enganches y lugares de origen y destino: “allá no hay nada...aquí, les damos trabajo”

La primera zafra del ingenio Melchor Ocampo se inició en marzo de 1971 con alrededor de cien personas contratadas para el corte y con duración de sólo 38 días, por las menos de mil hectáreas con caña (Zucarmex, 2003). Durante su construcción, el ingenio estaba en manos del Fideicomiso de Ingenios Azucareros, de Nacional Financiera; y desde la primera zafra hasta 1982 lo administró la Operadora Nacional de Ingenios (Onisa); a la par se dio aumento paulatino de parcelas cañeras y el número de cuadrillas con la organización y control de la CNC.

Entre 1981 y 1982, se fundó la Asociación de Agricultores del Valle Autlán-El Grullo, conocida desde el principio como la Pequeña porque fue creada por pequeños propietarios. Estos “*pequeños propietarios*” son medianos y grandes propietarios privados, varios de ellos herederos de los latifundistas existentes previamente a la reforma agraria. Posteriormente, la Pequeña se afiliaría a la Unión Nacional de Cañeros (UNC) de la Confederación Nacional de Proprietarios Rurales (CNPR); como parte también de una crisis de legitimidad de la CNC en todo el país (Mackinlay, 1996). La nueva agrupación cañera reprodujo la misma dinámica en el corte: contrato temporal, cuadrillas, pago a destajo, confinamiento en albergues y enganches ante la expansión de hectáreas cañeras. Severino Calles recuerda esos primeros años de enganche:

“Los primeros cabos que vinieron [...] traían gente de Altamirano, venían todos de aquel lado de Tierra Caliente y pues ya sabes que toda esa gente es brava y aquí hubo muchos problemas con la gente [...] Al inicio trajeron una cuadrilla y al año siguiente otra. Ya para zafrar se trajeron tres y ya había mucha caña entonces. [...] Traían gente de Morelos y la gente no cortaba casi y yo preferí traer gente de otro lado y yo necesitaba más gente. Vinieron unas familias de Tepetlixta, de ahí de Coyuca de Benítez [Guerrero] para arriba, de Aguas Blancas para adentro, para el cerro, feo, feo. [...] Porque le hemos calado en varios puntos y no creas que la gente sirve para trabajar; o viene gente muy buevona, muy problemática o con mucha política.”

Severino nació en Autlán en 1960 y es cabo desde mediados de la década de 1980. Él comenzó como cortador con el fin de obtener un crédito gubernamental exclusivo para cortadores de caña. Este préstamo fue para la construcción de casas propias y a fondo perdido por lo que atrajo a muchas personas que previamente no habían cortado caña. De acuerdo con relatos de cortadores, varias personas consiguieron beneficiarse sin cortar y otras sólo trabajaron por los cinco años que obligaba el programa federal.

No obstante, el arribo de gente para laborar en la agroindustria regional continuó. Los lugares de donde provenían no necesariamente fueron zonas cañeras cercanas ni por medio del enganche. El valle se convirtió en un referente de trabajo asalariado agrícola y gente de distintos lugares arribó para laborar en la caña y en las hortalizas (Torres, 1997).

Lo que resalto es cómo los enganches se han dado en municipios como Casimiro Castillo, Jalisco, y Quesería, Colima; o en las regiones de Tierra Caliente en Michoacán y Guerrero, de Costa Grande y Alto Balsas en Guerrero, y Valles Cañeros en Morelos, además de los cortadores nacidos en el valle Autlán-El Grullo y quienes han llegado de otros lugares mediante redes laborales y familiares. De este modo, nunca hubo un lugar único del cual provinieran todos los cortadores y sus familias; sin embargo, se ha creado una distinción para categorizarlos a partir de sus *“lugares de origen”*.

Para Severino, la gente de Tierra Caliente es *“brava”*, la del Balsas es *“buena para chamber”*, mientras que las personas de Morelos son *“muy buenos y muy ratas”*. Para otras personas ni siquiera existen tales diferencias geográficas; quienes cortan caña vienen de otro lugar inferior. La expresión *“son de Guerrero”* sumado a otras como *“allá no tienen nada”*, *“éste es su Estados Unidos”* o *“aquí tienen todo”* fueron constantes entre agricultores, empleados gubernamentales, académicos, cronistas y personal de la CNC, la Pequeña y Zucarmex.

12 

Un ex delegado municipal comenta *“han traído muchos problemas porque son gente que no tienen gobierno de donde vienen”* y una empleada gubernamental señala *“se vienen porque allá no hay nada, en su pueblo no tienen ni maíz”*. De igual manera, *“oaxaco”* es uno de los términos despectivos usados que hace referencia al estado de Oaxaca. Incluso, entre cortadores se buscan desmarcar indicando que son nacidos en el valle o burlándose de quienes hablan náhuatl o mixteco. Fausto García, quien nació en Autlán y cortó caña por 15 años, indica: *“son de la sierra, de allá de Guerrero. Están hechos para eso, para el trabajo fuerte, pero venir de la sierra también los hace violentos”*.

Tanto la categorización de estados pobres como los estereotipos de lugares violentos y sin gobierno son clasificaciones que establecen oposiciones. Michel-Rolph Trouillot (2003), en su explicación sobre la creación del *“Occidente”*, expone cómo el *“aquí”* y el *“allá”* son categorías que operan sólo en oposición. Aunque el *“aquí”* no es fijo ni cuenta con contenido único al tratarse de proyecciones; sí parte de la diferenciación de esos otros lugares y trae consecuencias concretas al tomar forma por medio del conocimiento, la economía y la política.

En la región, la distinción espacial se usa en beneficio de la legitimación de condiciones laborales. El “*aquí*” es la región receptora y próspera, o como considera un cronista regional: “*son los que quieren venir [...] van haciendo pelea por esta fuente de trabajo*”. Esos otros lugares son homogeneizaciones, estandarizaciones y clasificaciones sobre sus “*orígenes*” como zonas pobres, ingobernables o atrasadas. De este modo, se reproduce una distinción basada en nociones de polarización espacial y determinismo geográfico entretejidos con la desvalorización del trabajo del cortador en la cadena de producción cañera-azucarera.

“*Tú tienes que estar agradecido de que te de trabajo y no estarme exigiendo cosas*”, fue lo que respondió el presidente de una de las organizaciones cañeras cuando Horacio Aldama, cortador de 47 años, exigió un aumento del pago por tonelada y entrega de mayor número de triángulos para afilar, lo que Horacio considera: “*son muchos los cortadores y cabos que han corrido por exigir. [...] Lo clásico es que te digan ‘si quieres y si no vete a la chingada’, así nos tienen*”.

Intermediarismo y armas blancas: de grillero a violentos

Horacio nació en 1966 en el poblado de San Agustín Ostotipan, municipio de Mártir de Cuilapan, en la región del Alto Balsas, Guerrero. Desde hace poco más de 10 años se radica en el albergue cañero de El Grullo con su esposa e hijos. A los 12 años salió del Alto Balsas por primera vez junto con sus hermanos. Él trabajó en distintas regiones cañeras; en Colima fue invitado por cabos para cortar en el valle Autlán-El Grullo. Ahí se estableció unos años, después viajó a otras partes del país y se radicó un tiempo en Estados Unidos. A finales de la década de 1980, regresó a San Agustín Ostotipan para cultivar la milpa en tierras comunales, como ya lo hacía su padre. En esos años, dice, “*estuve metido en la política*” en el marco de megaproyectos federales en el estado de Guerrero.

En 1990, durante la gestión federal de 1988-1994, se puso en marcha el proyecto hidroeléctrico “San Juan Tetelcingo” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En la proyección, la presa inundaría varios pueblos, incluyendo San Agustín Ostotipan; para impedir la construcción se conformó el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas con representantes de 37 comunidades. Entre protestas, hostigamiento militar, bloqueos de carreteras, dialogo ríspido con autoridades federales y difusión nacional e internacional mediante el Comité de Apoyo; se logró detener el proyecto (García 2001).

Para Horacio, el logro fue posible porque *“hubo unión entre los pueblos y aquí no la hay entre cortadores”*. En la conversación, él alude a la nula existencia de sindicato ni agrupación autónoma alguna que canalice sus demandas laborales; sumado a la dinámica de pago a destajo que promueve la competencia entre cortadores y cuadrillas.

La estructura del corte de caña se caracteriza por la cadena de intermediarismo y la multiplicidad de patrones; las cuales, cooptan las solicitudes de mejoras laborales y constriñen intentos de crear grupos independientes. Es una organización jerárquica cuyos cabos y presidentes de las uniones son a su vez empleadores y supuestos portavoces de los cortadores. La CNC y la Pequeña representan a los trabajadores ante instancias gubernamentales como el IMSS. Esto también sucede en el ámbito estatal y nacional, cuyos cabos y cortadores entran en la misma categoría de *“trabajador de campo cañero”*.

Asimismo, en la mesa de atención a jornaleros agrícolas de Autlán, espacio de planeación y coordinación gubernamental, son las trabajadoras sociales contratadas por las organizaciones cañeras las que forman la supuesta representatividad de quienes cortan caña y sus familias. Ellas mismas dialogan constantemente con los cabos acerca de los problemas en los albergues cañeros, ya que ambos puestos son *“responsables de los que ahí viven”*, como lo dijo el presidente local de la CNC.

En ese mismo sentido, los cabos son los patrones directos de los cortadores y su principal canal de solicitudes y reclamaciones hacia sus empleadores legales. Ellos se encuentran en constantes posiciones de autoridad como jefes de la cuadrilla. Por otro lado, mantienen afinidad con los problemas de los cortadores y se enfrentan a conflictos con los presidentes de las organizaciones cañeras, los inspectores de campo y los propietarios de las tierras.

Gustavo Martínez, cabo mencionado al principio, recuerda conversaciones con *“los patrones”* que lo encaran y le dicen: *“tú para qué te mueves, ya déjalos así, tú quédate con tu dinero y ya, no andes exigiendo por ellos”*. También cuenta las presiones de los inspectores de campo de Zucarmex como *“a ese ya córrelo, corta muy mal”*. En una de las ocasiones en que un inspector regañó a Gustavo porque consideró que estaba cortando mal, él le dio el machete y le dijo *“hazlo tú, dime cómo si tanto sabes”*; el inspector se negó y se fue. El problema, dice Gustavo, *“es que después nos castigan sin dar corte al día siguiente”* o incluso no los vuelven a contratar en posteriores zafras sin avisarles previamente.

Por otro lado, conversando con cabos acerca de los cortadores, fue común que pasaran del *“nosotros”* al *“ellos”* y viceversa; o que reprodujeran los estigmas

regionales hacía los cortadores y sus familias, pero quejándose de las discriminaciones que reciben. Esta ambivalencia en sus opiniones son producto de su doble función en la estructura laboral, de ser el patrón visible y el mediador de las demandas. El cabo y otros intermediarios laborales han representado un mecanismo inherente a las agroindustrias. El intermediarismo diluye la responsabilidad del empleador, alienta la competencia y la división entre trabajadores y contiene conflictos, favoreciendo así el desdibujamiento de la confrontación de clase entre capital y trabajo (Sánchez, 2002)

No obstante, hay agricultores y personal de las organizaciones cañeras y Zucarmex que explican este intermediarismo por otras causas: “*son sus costumbres*”, “*así ya se organizan en sus comunidades*” y “*siempre hace falta quien les ordene*”, fueron algunas de las razones que mencionaron. Se trata de una estructura asimétrica que favorece la continuidad de la producción y se justifica por determinismos culturales creados con supuestos y estereotipos.

Tal organización jerárquica en el corte ha persistido con la privatización de ingenios en la década de 1990. En 1993, al ingenio Melchor Ocampo lo compró la CNC pero su administración sólo duro un año ya que fue recogido por Financiera Nacional Azucarera (Finasa) por adeudos. En 1994, fue puesto en venta de nuevo y fue comprado por el grupo empresarial Zucarmex, su actual propietario y de otros cuatro ingenios en el país.

Sin embargo, las acciones y exigencias de los cortadores y sus familias no se limitan a esta supuesta representatividad de cabos, trabajadoras sociales y presidentes de la CNC y la Pequeña. Gustavo se refirió a los conflictos con los inspectores de campo y Horacio narró los pleitos por exigir mejor salario y más herramientas de trabajo. Cabos y cortadores comentan de las negociaciones y discusiones anuales por mejoras en el pago; y algunos trabajadores recuerdan el paro de labores por unos días en 1995 con el cual lograron un aumento en el pago por tonelada. No sólo son confrontaciones directas con los empleadores, también con docentes, personal gubernamental, vendedores, arrendadores y médicos.

César, de quien narré anteriormente, obtuvo la pensión pero conseguirla le tomó varios años. En personal del IMSS le decían en tono de burla “*¿cuándo ha visto un cortador con pensión?*” a lo que él enojado les respondía “*porque pocos aguantan tantos años como cortadores*”. Después de numerosas visitas a oficinas, papeleo y discusiones, consiguió la pensión a la edad de 70 años.

El mismo César, en su relato acerca de la dificultad por habitar en una localidad de Autlán, recuerda:

“Fueron varias veces que le pedí al delegado y al regidor que pidieran al municipio que quitaran la arena y no hacían nada. Con oficios y visitas a la presidencia logré que quitaran la arena pero antes el regidor mandó la máquina a otro lugar y no a mi calle. [...] Ese día que pasó lo de la máquina que la mandó a otro lado, fui con machete en mano a encarar al regidor. Logré que quitarán la tierra y es que no era sólo el terregal y lo difícil para pasar a la casa, también era que a mis hijos no les picara un alacrán”.

Para César, la amenaza con machete en mano fue la última opción, pero en la región es recurrente mencionar el peligro de los machetes y la violencia de los cortadores. Dos propietarios de tierras mencionan:

“El sonido de los machetes en la noche nos daba miedo, ya ni salíamos [...] y es que son muy violentos y les gusta la tomadera. [...] Aquí mataron a uno, le cortaron la cabeza con el machete”.

“En la tarde venían acá para el rancho y con los pinches machetes bien fajados, esa era su arma. Todavía hay un cabrón que le dicen el Indio que trae su cuchillo para arriba y para abajo”.

En la primera narración, se refiere a un asesinato que ocurrió hace más de 35 años en una localidad de Autlán. Por causa de este hecho, residentes del poblado exigieron y obtuvieron que el ayuntamiento construyera una caseta de policía. La resignificación del machete, de herramienta de trabajo a objeto para matar, se enmarcó en políticas públicas regionales para prohibir el uso de armas. Periódicos de la década de 1970 y 1980 publicaron varias noticias sobre el “programa de despistolización” que no sólo incluyó la prohibición de portar armas de fuego y despojar a quienes las tuvieran en vía pública, también se incluyeron “armas blancas” por lo que se documentaron casos en que les retuvieron machetes, navajas y otras “armas punzocortantes”.

Con ello, se construyó la figura del cortador como natural o potencialmente violento mediante el uso selectivo de elementos estigmatizantes. A su vez, se amenaza y desprestigia a quienes buscan mejoras laborales fuera de los marcos del intermediarismo y la unificación patronazgo/representatividad. Aun con transformaciones en la cadena de producción cañera-azucarera, las jerarquías y condiciones desiguales se mantienen.

Trabajador agrícola migrante: Jornalero indígena e invisibilización de las mujeres

De acuerdo con distintas ediciones anuales del Manual Azucarero Mexicano, en la zafra 1984-1985 se registraron 450 cortadores en el ingenio Melchor Ocampo; y en 1995-1996 documentaron 700 personas. No obstante, aun con el aumento de hectáreas cañeras en los siguientes años, el número de trabajadores disminuyó por la compra gradual de máquinas cortadoras por parte de la CNC y la Pequeña. En 2001-2002 el corte mecánico fue del 18.4% y para 2009-2010 creció a 30%. Sin embargo, de acuerdo con ingenieros de Zucarmex, la mecanización del corte se frenó por varios motivos de productividad: parcelas pequeñas, terreno rocoso, desnivel de suelos y quejas de agricultores por el daño en sus tierras.

El uso de máquinas impidió la recontractación de cuadrillas para las siguientes zafras y son un referente para amenazar a cabos y cortadores ante exigencias laborales; esto es posible porque el corte de caña ha sido desde el comienzo un trabajo temporal. Es un empleo requerido sólo en los meses de cosecha para abastecer al ingenio. La eventualidad laboral de los aproximadamente 600 cortadores lo establece su contrato, el cual es permitido por la ley de derechohabencia en el IMSS y la ley federal del trabajo. Sin embargo, el tiempo de residencia de quienes arribaron para el corte nunca fue determinado por esto; se han establecido definitivamente o por unos años, aun con las distintas estrategias para controlar su permanencia en la región.

A finales de la zafra 2011-2012, un empleado de la Sedesol visitó uno de los albergues cañeros. Él explicó a quienes ahí habitan que, si querían recibir la transferencia monetaria del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), debían irse por unas semanas. Su propuesta desencadenó una serie de reclamos: “*¿por qué quieren que nos vayamos?! ¡Aquí venimos a trabajar!*”, “*¡Tenemos la libertad de quedarnos, aunque me saquen del albergue no me voy!*”, “*¡Quédate con tu dinero!*”. Al final, expulsaron del albergue al empleado del gobierno federal.

El PAJA se estableció en 1990 con el nombre de Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas (Pronjag) y para el sexenio de 1994-2000 se enmarcó en el Programa para Superar la Pobreza (Sedesol, 2000)¹. Desde su inicio, ha formado

¹ El PAJA fue eliminado para el ejercicio fiscal del 2019 sin que exista una clara alternativa en la política pública federal.

parte de Sedesol y ha sido focalizado, es decir, para determinada población que debe cumplir con ciertos requisitos.

De acuerdo con sus reglas de operación, los requisitos marcan que por lo menos un integrante del denominado “*bogar jornalero migrante*” debe trabajar en una “*región de atención jornalera*”, acreditar que son “*migrantes*” y emplearse con empresas dadas de alta. El valle Autlán-El Grullo es una de estas regiones y las dos uniones cañeras están inscritas en el PAJA. No obstante, sólo una parte de las personas que cortan caña y sus familias tienen el apoyo debido a que no cumplen con requisitos como portar sus actas de nacimiento o credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) fuera de Jalisco.

Sumado a la transferencia monetaria, el PAJA implementa subprogramas de alimentación, educación, salud, investigación e infraestructura, como el subsidio parcial a empresas para la construcción de albergues privados. Muchas de sus acciones, las coordinan con otras dependencias gubernamentales y con los empleadores agrícolas; principalmente, dentro de las mesas de atención a jornaleros agrícolas municipales y estatales.

En Autlán, la mesa de atención se creó a principios de la década de 2000. En ésta confluyen personal de los gobiernos municipales, estatales y federales, representantes de empresas hortícolas y de las uniones cañeras. Quienes organizan las reuniones mencionan que la principal función es “*canalizar toda ayuda*”, “*no repetir esfuerzos*” y organizar las actividades como los festejos por el día del migrante o de poblaciones indígenas.

Al asistir a las reuniones mensuales de la mesa escuché constantes relatos acerca de “*conservar sus costumbres y su lengua*” o “*mostrar sus artesanías y comidas típicas*”; junto al uso de verbos “*dar*”, “*apoyar*” y “*ofrecer*”. Asimismo, se recrearon sucesos con reflexiones finales: “*se ve cómo aceptan todo*” o, por otro lado, “*son bien delicados, luego no les gusta lo que se les da*”. Además del uso repetido de “*jornalero agrícola migrante*”, también se mencionó “*muchos son indígenas*” y “*son a los que les dicen cochos*”. La importancia es el “*patrimonio cultural*”, recalcó un profesor en un evento organizado por la mesa en un albergue de El Grullo.

El punto por destacar es que en estas relaciones asistencialistas se entrevera la categoría de estado “*jornalero agrícola migrante*” con concepciones exóticas de lo indígena. Se trata de la clasificación de “*jornalero indígena*” presente en ámbitos académicos y gubernamentales; una categoría alimentada por esencialismos y argumentos de objetividad estadística con la finalidad de gestionar y controlar la heterogeneidad (Vázquez, 2010). Son categorías, prácticas y discursos que forman parte del multiculturalismo neoliberal en el cual hay tiempos, espacios y

formas autorizadas de ser indígena en el marco de la pluralidad, riqueza cultural y diferencias armónicas; sin objetar desigualdades e injusticias (Hale, 2007).

Asimismo, en las reuniones de la mesa de atención a jornaleros agrícolas se propusieron proyectos de “*pequeñas empresarias*” para las mujeres; entre los argumentos estaba el supuesto de que hicieran algo “*productivo*”. Una de las asistentes de la mesa repitió lo dicho a la madre de un cortador menor de 15 años: “*usted está para que lo eduque no para que la mantenga*”. Las parejas, madres o hijas de cortadores de caña pocas veces son cortadoras, pero trabajan en la elaboración de comida, cuidado de hijos, lavado de ropa, limpieza de cuartos y de todo el albergue y son responsables de cumplir las actividades para recibir las transferencias monetarias gubernamentales.

En esta situación se encuentra Teresa Bautista, quien tiene 42 años y nació en San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuc de los Figueroa, región del Alto Balsas en Guerrero. Desde hace 22 años, poco tiempo después de casarse, ella comenzó a migrar a zonas cañeras del occidente de México. Actualmente, Teresa reside junto con su pareja, tres hijos y una hija en uno de los albergues cañeros. Su esposo e hijos son cortadores mientras que su hija estudia la preparatoria y trabaja en casa. Teresa expone cómo su hija no ha conseguido una beca para habitantes del estado de Jalisco porque en las oficinas municipales les dicen que son migrantes, aun cuando en documentos oficiales son residentes de El Grullo.

Al conversar con Teresa, me comentó que nunca ha cortado caña y cuando pregunté el porqué, ella enfatiza que en tiempos de zafra es cuando tiene mucho más trabajo. Ella hace el almuerzo alrededor de las 6:00 am, hora en que se prepara su hija para ir a la preparatoria a su vez que se alistan sus hijos y esposo para ir al corte. Después, tanto a las 10.00 am como a las 2.00 pm, debe tener las cuatro comidas listas ya que son las horas en que viene el responsable de la cuadrilla para llevar los alimentos a las parcelas. A la llegada de los cortadores, entre 5.00 pm y 7.00 pm, lava la ropa porque si lo hace después es más difícil quitarle el tizne y queda tiesa, explica Teresa. Más tarde hace la cena y, como en las demás comidas, también tuesta y lava los trastes.

A diferencia de los hijos y pareja de Teresa, otros cortadores deben pagar alrededor de \$500 por semana por tales trabajos; esto, comparado con el sueldo del cortador que es de entre \$1.000 y \$2.000 semanales. Quienes lo pagan son hombres que no forman parte de un grupo doméstico en el albergue y viven junto con otros cortadores en los cuartos para “*solteros*”. Quienes realizan tales labores, son mujeres que también los hacen para sus parejas, hijos, suegros o

padres sin pago alguno. Así, aun cuando el trabajo de Teresa y otras mujeres equivale a por lo menos un cuarto del sueldo de un cortador; no se plantea como importante para cortadores, cabos y personal de gobierno, organizaciones cañeras y la empresa azucarera.

Además, es común que se encuentren en situaciones de violencia física, acoso sexual y prohibición de salir del albergue. Ante ello, las organizaciones cañeras se limitan a la canalización del problema ante las autoridades gubernamentales. A su vez, las instancias de gobierno participan de manera crítica frente a la naturalización del papel doméstico de la mujer y con la violencia ejercida hacia ellas.

También, muchas de ellas laboran en la siembra de caña y en la cosecha hortícola. Sus jornadas laborales incluyen la pizca de hortalizas en empresas tomateras o chileras junto con el trabajo en casa por la mañana y la noche. Son estrategias económicas de los grupos domésticos frente a las precarias condiciones laborales pero enmarcadas en la masculinización del corte de caña.

La agroindustria regional recrea y usa a su favor tal división sexual del trabajo y la desvalorización de la labor de las mujeres. La producción cañera ubica al cortador en lo individual y niega la existencia de grupos domésticos. Es un proceso sistemático en el cual el capital propicia y se beneficia con la disociación de la reproducción económica y social; separación por la cual tales labores domésticas no son reconocidas como trabajo y no tienen valor monetario (Federici, 2012). En la agricultura intensiva, la labor en el hogar y en los surcos no son reconocidas; las mujeres son categorías de trabajo barato y flexible (Pacheco, 2011).



Reflexiones finales

La historia oficial de la agroindustria del valle Autlán-El Grullo responde a su posicionamiento racial acerca del trabajador agrícola como: eterno migrante, naturalmente violento, salvaje por civilizar y museo viviente a preservar. Es un proceso de racialización entrelazado con la invisibilización del trabajo de las mujeres. Es una historia contada para preservar el modelo de explotación; de categorizaciones estatales impuestas y de confinamiento espacial. No obstante, el modelo agroindustrial y su historia de desarrollo tienen fisuras por las resistencias cotidianas pasadas y presentes.

Elías Soto es uno de los cabos de más reciente ingreso, “*soy de la nueva generación*” dice. Él critica a aquellas personas que tienen desconfianza y se burlan de

quienes, como él, hablan náhuatl: “*creen que uno es el pendejo, pero más ellos que nomás hablan español*”. Al conversar sobre esta región, opina que “*aquí la gente es menos campesina, [...] ya se les hace duro trabajar*”. Elías se asume como campesino cuando se refiere a trabajar las parcelas, también se dice guerrerense al hablar de los enganches y de problemas económicos en este estado. Son categorías de clase o geopolíticas a las que varios cortadores también se sumaron. Son autoadscripciones que se desmarcan de estereotipos raciales y desbordan las categorías de estado.

Las resistencias cotidianas de Elías, Teresa, Ceésar, Gustavo y Horacio son acciones políticas opuestas al deber ser y hacer como hogar migrante “*beneficiario*” de políticas públicas; son alteraciones de lo que se espera de un cortador de caña “*agradecido de recibir*” trabajo y vivienda. Son afrentas a la castellanización de los pueblos indígenas, a la desvalorización del trabajo de mujeres y al control de la movilidad espacial del trabajo agrícola asalariado.

Son acciones políticas imprevistas, dispersas y sin registro alguno, pero enmarcadas en el reconocimiento y cuestionamiento de normas injustas y relaciones de poder desiguales. Es la infrapolítica que James Scott (2000) explica como prácticas cotidianas de resistencia de grupos subordinadas contra las élites locales y autoridades estatales que son anónimas pero desafiantes a aquellos valores y convenciones que benefician a los grupos dominantes.

Como pueblos indígenas o cuerpos racializados indios resisten al confrontar, al aparentar acato y al infiltrarse en espacios no designados; pero también resisten sólo al existir frente al despojo capitalista y a la política integracionista del estado mexicano (Aguilar, 2019). Son cuerpos y conocimientos que evidencian y resisten las violencias de sexo, clase y raza. Son vidas y narraciones diversas que se articulan para cuestionar y alterar la historia del progreso regional.

El objetivo del artículo fue mostrar tal proceso de dominación, conflicto y resistencia en la organización económica y política del valle Autlán-El Grullo. El estudio se enfocó en la producción cañera pero presenta un escenario similar la producción hortícola en la región. Igualmente, la perspectiva regional permite el detalle de las diferencias internas, pero también abre preguntas sobre cómo se enmarca en la agroindustria nacional y global.

Por otro lado, se destacó el proceso de racialización de hombres cortadores, por lo que surge el interés en profundizar y detallar más las historias de las trabajadoras. Además, se abren interrogantes acerca de los procesos de dominación y resistencia previos, por ejemplo en la plantación colonial, el latifundismo liberal y el agrarismo postrevolucionario.

Por último, considero necesario continuar la discusión sobre la memoria histórica de trabajadoras y trabajadores agrícolas desde perspectivas que analicen las violencias estructurales y la economía política. Lo considero importante para confrontar con las continuas promesas de progreso y desarrollo de la agroindustria y el estado.

Bibliografía

- Crenshaw, K. (1991), “Mapping the margins: intersectionality, identity politics and violence against women of color”, *Stanford Law Review* 6 (43).1241-1299.
- Elias, N. (2003), “Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros”, en *Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas* (104), 219-251.
- Federici, S. (2013), *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*, Madrid, Traficante de Sueños.
- García, M. (2001), “Nadar a contracorriente en el Balsas. Segundo tiempo”, en Macías, Jesús (comp.), *Reubicación de comunidades humanas. Entre la producción y reducción de desastres*, Colima, Universidad de Colima, 140-155.
- Aguilar Gil, Y. (2019), “Resistencia. Una breve radiografía”, *Revista de la Universidad de México* (847), 20-27.
- González, H. (2012), “Alternativas locales a la degradación ambiental en México”, en Maganda, Carmen y Olivier Petit (coords.), *Strategic natural resource governance. Contemporary environmental perspectives*, Bruselas, Peter Lang, 171-196.
- Gotkowitz, L. (2011), “Introduction: Racisms of the present and the past in Latin America”, en Gotkowitz, Laura (ed.), *Histories of race and racism. The Andes and Mesoamerica from colonial times to the present*, Durham, Duke University Press, 1-53.
- Guha, R. (2002), *Las voces de la historia y otros estudios subalternos*, Barcelona, Crítica.
- Guzman-Flores, E. (1995), *The political organization of sugarcane production in western Mexico*, tesis de doctorado, Wageningen, University of Wageningen
- Hale, C. (2007), *Más que un indio. Ambivalencia racial y multiculturalismo neoliberal en Guatemala*, Guatemala, Avanco.
- Lomnitz, C. (1995), *Las salidas del laberinto. Cultura e ideología en el espacio nacional mexicano*, México, Planeta.
- Mackinlay, H (1996), “La CNC y el ‘nuevo movimiento campesino’ (1989-1994)”, en Grammont, H. C. (coord.), *Neoliberalismo y organización social en el campo mexicano*, México, UNAM y Plaza y Valdés, 165-238.

- Martínez, H. (1999), *De la lucha por la tierra a las carteras vencidas: el proceso agrario en Atlán-El Grullo, 1923-1995*, tesis de maestría, Guadalajara, Coljal.
- Medina, E. (2005), *Crónicas de Atlán de la Grana, Jalisco*, Atlán, Conaculta, Universidad de Guadalajara y Gobierno de Jalisco.
- Pacheco, E. (2011), “Las mujeres y el trabajo agropecuario en México: un acercamiento al trabajo de subsistencia en la última década del siglo XX”, en Tepechin, A.M. (coord.), *Género en contextos de pobreza*, México, Colmex., 177-201.
- Paré, L. & Juárez, I. (1987), “El proceso productivo de la caña de azúcar”, en Paré, L.; Juárez, I. y Salazar, G. (eds.) *Caña Brava. Trabajo y organización social entre los cortadores de caña*, México, UAM y UNAM, 17-24.
- Roseberry, W. (1994), “Hegemony and language of contention”, en Joseph, Gilbert y Daniel Nugent (eds.), *Everyday forms of state formation. Revolution and the negotiation of rule in modern Mexico*, Durham, Duke University Press.
- Sánchez, K. (2002), “Acerca de enganchadores, cabos, capitanes y otros agentes de intermediación laboral en la agricultura”, en León, Arturo; Beatriz Canabal y Rodrigo Pimienta (coords.), *Migración, poder y procesos rurales*, México, UAM y Plaza y Valdés, 37-64.
- Scott, J. C. (2000), *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*, México, Era.
- Scheper-Hughes, N. y Bourgois, P. (2004), “Introduction: Making Sense of Violence”, en Scheper-Hughes, N. y Bourgois, P. (eds.), *Violence in War and Peace*, Blackwell Publishing.
- Secretaría de Desarrollo Social (2000), *Jornaleros Agrícolas*, México, Sedesol.
- Torres, G. (1997), *La fuerza de la ironía. Un estudio del poder en la vida cotidiana de los trabajadores tomateros del occidente de México*, México, CIESAS y Coljal.
- Trouillot, M.R. (2003), *Global transformations. Anthropology and the Modern World*, Nueva York, Palgrave Macmillan.
- Van der Zaag, P. (1992), *Chicanery at the canal. Changing practice in irrigation management in Western Mexico*, tesis de doctorado, Wageningen, University of Wageningen.
- Vásquez, L. (2010), *Multitud y Distopía. Ensayos sobre la nueva condición étnica en Michoacán*, México, UNAM.
- Zendejas, S. (2008), “Por una etnografía histórica: Desafíos metodológicos de una etnografía sobre procesos históricos de formación de sujetos y espacios sociales”, en Gómez, Francisco (ed.), *Sendas en la globalización. Comprensiones etnográficas sobre poderes y desigualdades*, México, BUAP, Conacyt y Casa Juan Pablos, 113-148.
- Zucarmex (2003), *Desarrollo Operacional 1970-2002, Impulsora Azucarera del Noroeste, Ingenio Melchor Ocampo*, Atlán, Sin editorial.